Globethics Repository




# Colombia [Colombia]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

| | |
|---|---|
| Item Type | Article |
| Authors | Bejarano, Ana María;Pizarro, Eduardo |
| Publisher | Fundación Friedrich Ebert (FES) |
| Rights | Creative Commons Copyright (CC 2.5) |
| Download date | 2026-10-31 06:00:08 |
| Link to Item | http://hdl.handle.net/20.500.12424/220028 |

Nueva Sociedad Nro.133 Septiembre- Octubre 199 4 , pp. 12-19

# Colombia. Neoliberalismo moderado y liberalismo socialdemócrata

**Pizarro, Eduardo; Bejarano, Ana María**

**Eduardo Pizarro:** Politólogo colombiano, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
**Ana María Bejarano:** Politóloga colombiana, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Entre 1989 y 1990 Colombia vivió la crisis más aguda de su historia reciente, la cual colocó al país al borde de un «colapso institucional». Desde entonces, han triunfado en las urnas dos proyectos de solución a la crisis nacional: uno ya probó suerte y el otro comienza su camino a partir del 7 de agosto. El presidente saliente, César Gaviria, impulsó un neoliberalismo moderado acompañado de una profunda reforma constitucional con signos democratizadores. El presidente electo, Ernesto Samper, busca morigerar el ímpetu neoliberal anterior, responder a la angustiosa deuda social del país y profundizar el reformismo político. Este cambio que se vislumbra entre una y otra administración, amerita un balance tanto de la gestión del gobierno que sale, como de las perspectivas del gobierno que comienza.

A mediados de la década de los 80, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), pronunció una frase lapidaria que habría de producir mucho ruido y amplios debates en el país: «la economía va bien, el país va mal». En efecto esta breve frase sintetizaba en forma esquemática los tres rasgos más constantes de Colombia en las últimas décadas: una gran estabilidad macroeconómica, una continuidad ininterrumpida de gobiernos civiles y altos niveles de violencia. Sin pretender explicar ahora cómo pueden convivir estas tres dimensiones de la realidad contemporánea colombiana, es evidente que a fines de esa década el país comenzó a echar agua por todos los costados, pese a ser uno de los pocos del continente que no sufrió los efectos devastadores de la llamada «década perdida para el desarrollo».

### *Desarrollo y violencia*

La transformación del narcotráfico en narcoterrorismo, el auge inusitado de la acción guerrillera gracias a su unificación en el seno de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, el aumento de la criminalidad urbana difusa y organizada, así como la emergencia de múltiples grupos de justicia privada (paramilitares, grupos de au-

todefensa, escuadrones de «limpieza social»), condujeron a un aumento inusitado de las tasas, de criminalidad y de homicidios. A partir de 1988 se produce un salto cualitativo en el número de homicidios, lo cual, sumado a un derrumbe total del aparato de justicia (congestión, impunidad), condujo a un sentimiento generalizado de inseguridad en la opinión pública y a un desbordamiento de múltiples formas de violencia que llevaron a pensar en un inminente colapso del Estado en su conjunto. Nada simboliza mejor esta situación de caos que el asesinato de tres precandidatos presidenciales entre agosto de 1989 y abril de 1990 [1].

La multiplicación de la violencia en sus diversas formas y el dramático incremento de sus índices (los más altos del mundo en naciones que no se hallan en guerra civil o envueltas en un conflicto internacional), expresaron la magnitud de la crisis política por la que atravesó Colombia al finalizar la década pasada. Tal crisis tuvo por lo menos tres componentes: en primer lugar, una disminución acelerada de la capacidad del Estado para imponer y sustentar un orden colectivo, lo que algunos han calificado como un «colapso parcial del Estado»; en segundo lugar, un cuestionamiento generalizado de las reglas, procedimientos e instituciones que regían el juego político desde el Frente Nacional, lo que varios autores han denominado como una crisis de legitimidad del régimen de «democracia restringida»; y, finalmente, un profundo debilitamiento de la sociedad civil, ocasionado por múltiples factores y catalizado sin duda por los índices de violencia observados a lo largo de la década. Por ello, tanto el fortalecimiento político del Estado, como la redefinición de sus relaciones con la sociedad, es decir la reforma del régimen, se impusieron como prioridad central en la agenda de la reforma política en Colombia [2].

A los hondos desarreglos en el plano societal y político-institucional se añadía la necesidad de introducir cambios en el modelo de desarrollo económico. Si bien la economía colombiana no había sido sacudida por la grave crisis que afectó al resto del continente durante los 80, existía la sensación de que el modelo orientado hacia el mercado interno estaba agotado, lo cual se evidenciaba en el estancamiento e incluso la disminución de las tasas de crecimiento total y sobre todo, manufacturero[3]. Pero más allá del agotamiento interno del modelo, resulta claro que al finalizar la

[1]Según la Policía Nacional de Colombia, estas son las cifras de homicidios de los últimos 16 años: 1978/11.037; 1979/12.983; 1980/13.048; 1981/ 14.860; 1982/14.647; 1983/13.913; 1984/14.964; 1985/16.932; 1986/19.809; 1987/21.853; 1988/25.738; 1989/27.892; 1990/28.475; 1991/28.300; 1992/ 25.030; 1993/24.500.

[2]Para una ampliación de este argumento, v. Ana María Bejarano: «Recuperar el Estado para fortalecer la democracia» en Análisis Político Nº 22, 5-8/ 1994.

[3]Andrés López Restrepo: «El cambio de modelo de desarrollo de la economía colombiana» en Análisis Político Nº 21, 1-4/1994, pp. 20-1.

década la economía colombiana debía necesariamente ajustarse a los cambios inminentes e irreversibles del sistema económico internacional.

### *El neoliberalismo moderado*

En este contexto de crisis fue elegido presidente César Gaviria. Los desafíos centrales que enfrentaba su administración eran claros: evitar un colapso definitivo del Estado, relegitimar las instituciones políticas e introducir cambios fundamentales en el modelo de desarrollo económico. La administración Gaviria introdujo de lleno a Colombia en la dinámica de la doble transición - profundización de la democracia y ampliación de la economía de mercado -, con objeto de actuar sobre esos desafíos.

En cuanto a lo primero, sin duda el hecho más relevante es la promoción y el respaldo otorgado por su gobierno a la primera Asamblea Constituyente elegida por voto popular en la historia de Colombia. La composición misma de la Asamblea Nacional Constituyente significó un viraje histórico en cuanto a la representación política en el país. Por primera vez no fueron los partidos tradicionales los que monopolizaron la capacidad de decisión respecto del futuro político de los colombianos. A esta histórica asamblea también tuvieron acceso los movimientos de izquierda, así como algunas minorías sociales secularmente excluidas del debate nacional, en particular las comunidades indígenas y los movimientos cristianos no católicos. El hecho de que ninguna fuerza lograra el control absoluto sobre la Asamblea, dio paso a un pacto político amplio y democrático que cristalizó en la promulgación de un nuevo texto constitucional en julio de 1991. Con todo y sus limitaciones, la nueva carta constitucional, en tanto «pacto político» entre fuerzas heterodoxas e inestables, logró su cometido principal: la eliminación de los obstáculos más visibles para una democratización del régimen, la profundización de los rasgos de democracia representativa previamente existentes y la creación de nuevas instituciones democráticas.

Sin embargo, la solución a la crisis no residía exclusivamente en la democratización del aparato estatal y del régimen; también dependía de la recuperación y el fortalecimiento de un Estado precario y débil, incapaz de cumplir con sus funciones más elementales. La construcción de un Estado fuerte (lo cual no es sinónimo de autoritario), es condición sine qua non de la estabilidad de un régimen democrático como el que se esboza en la Constitución de 1991, y quizás la única alternativa para superar el conflicto armado interno. La administración Gaviria (1990-94) se distingue de las inmediatamente anteriores en el propósito de diseñar en forma explícita

una política de seguridad, la cual ha tendido hacia la construcción del aparato de Estado como monopolio legítimo y eficaz de la justicia y del uso de la fuerza. Que este gobierno se haya propuesto diseñar una política explícita en tal sentido no es mera coincidencia. Tal propósito surgió como resultado del «colapso parcial del Estado» sufrido entre mediados de 1989 y l990, luego del cual las élites estatales comprendieron que la salida a la crisis nacional no se reducía a una serie de reformas parciales, y que la consolidación del régimen implicaba un serio fortalecimiento del Estado.

Al realizar un balance de la administración Gaviria con relación a los fenómenos de violencia se pueden destacar algunos logros en el campo de la violencia organizada, aunque las tasas de criminalidad continúan siendo las más altas del mundo. En cuanto hace a los actores armados, éstos disminuyeron su número e incidencia en estos cuatro años. Si en 1987 el entonces ministro de Gobierno, César Gaviria, calculó el número de grupos paramilitares en 148, cuatro años después el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), habla de unos treinta grupos reconocidos. En cuanto a los grupos guerrilleros, la mayoría de ellos se reintegraron en forma progresiva a la vida civil (M- 19, EPL, Quintín Lame, PRT, CRS), lo cual condujo a una distensión en zonas de alta conflictividad. Igualmente, fue notable la disminución del narcoterrorismo urbano con la muerte de Pablo Escobar y del narcoparamilitarismo rural con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha. Finalmente, la Consejería Presidencial para Medellín logró en los últimos meses la reincorporación de varios grupos de las «milicias populares» de Medellín.

### *Reforma del Estado*

Además de la disminución del número de actores, varias reformas introducidas durante la administración Gaviria apuntan en el sentido de recuperar para el Estado el monopolio de la justicia y del uso legítimo de la fuerza: el fortalecimiento del aparato judicial, las políticas de control sobre la circulación de armas, la subordinación de los militares a los civiles, y la reforma de la policía. Se trata, indudablemente, de reformas que rendirán resultado en el largo plazo. Sin embargo, es preciso resaltar que todavía no se emprenden esfuerzos decididos contra la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas estatales. Sin esta condición, difícilmente puede afirmarse que el fortalecimiento del Estado pueda redundar en el fortalecimiento de la democracia.

Simultáneamente con la reforma política, el gobierno Gaviria introdujo de lleno a Colombia en la senda de la liberalización y apertura económicas. Las principales

reformas en este sentido afectaron el comercio exterior, el mercado de trabajo, el mercado financiero y el control de cambios. Paralelamente, el gobierno introdujo una serie de reformas administrativas, bautizadas con el nombre de «modernización del Estado», las cuales apuntan a aumentar la eficiencia administrativa, a eliminar, disminuir o reformular los mecanismos de intervención y regulación estatal de la economía, a promover la competencia tanto interna como externa, así como a ampliar la autonomía del mercado y por ende del sector privado [4].

Los cambios producidos en este campo han sido notables y, sin embargo, su impacto social y político dista de ser tan acentuado como los observados en otros casos latinoamericanos. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, el modelo «mixto» de desarrollo que prevaleció en Colombia durante las últimas décadas propició una transición menos traumática hacia el modelo de apertura. En segunda instancia, el proceso también fue facilitado por la adopción tardía y moderada de las medidas de estabilización y ajuste estructural, modalidad que fue posible gracias a que Colombia logró evitar lo peor de la crisis económica de los 80. Pero sobre todo, el leve impacto de la reforma económica tiene que ver con el hecho de que el Estado colombiano nunca logró constituirse en un Estado desarrollista o benefactor, al estilo de otros Estados latinoamericanos. Nuestro Estado ha sido históricamente débil, pequeño y pobre. Esta constatación nos obliga a matizar, para el caso colombiano, los argumentos sobre el impacto social y político que ha producido la orientación neoliberal de las economías latinoamericanas.

Con todo y los debidos matices resulta necesario, sin embargo, identificar algunos de los sectores afectados durante el proceso de reorientación del modelo de desarrollo. En primer lugar, el sector agropecuario, el cual sufrió una grave crisis entre 1990 y 1994, debida parcialmente a las condiciones de competencia creadas por la apertura. En segundo lugar, debemos señalar una caída o, por lo menos, un estancamiento en los niveles del gasto social. El Estado colombiano nunca ha poseído, como el mexicano o el uruguayo, amplios poderes de intervención para paliar los efectos de la desigualdad social. Tampoco ahora se ha dado un esfuerzo explícito por parte de las élites gubernamentales para rediseñar nuevas funciones y fortalecer la capacidad redistributiva y de regulación social del Estado. Pese a la retórica oficial y a algunos esfuerzos novedosos en este sentido, el rediseño y fortalecimiento de la política social continúan teniendo escasa prioridad en la agenda del Estado colombiano. Sin desdeñar los avances políticos reseñados arriba, no podemos olvidar que una enorme carga de pobreza y de miseria, es decir, de exclusión social, se

[4] Al respecto, v. Consuelo Corredor: «La estrategia de modernización del Estado en Colombia» Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, CID, Bogotá, 1993, inédito.

cierne sobre las posibilidades de participación y representación de los colombianos. Tampoco debemos olvidar que al Estado colombiano le corresponde, tanto como a sus pares latinoamericanos, un papel protagónico en la regulación de los desequilibrios sociales vía su función redistributiva.

Gaviria culmina su período presidencial con el más alto índice de aceptación que haya tenido presidente alguno al culminar su mandato (67 %). Esto se debe en parte a un hábil manejo de su imagen a través de los medios, pero también a una serie de realizaciones que dejan resultados positivos para muchos sectores de la sociedad colombiana: una reforma política de amplio alcance, un cambio en el modelo de desarrollo relativamente exitoso y con menores costos sociales y políticos que en la mayor parte de América Latina, una reducción del narcoterrorismo y un relativo fortalecimiento del Estado para combatir el crimen organizado. La tarea, sin embargo, no ha culminado todavía. La administración entrante hereda también problemas que han quedado sin resolver: si bien la nueva Constitución amplía los horizontes de la democracia, su debida reglamentación y su puesta en práctica enfrentan obstáculos pendientes; la nueva orientación del modelo de desarrollo, ya irreversible, debe consolidarse logrando una vinculación estable y exitosa de la economía colombiana con el mercado internacional; esta meta, a su vez, debe hacerse compatible con una política destinada a reducir los niveles de pobreza y propiciar una mejor distribución de los beneficios del crecimiento; por otra parte, si bien no estamos ya frente a la amenaza del narcoterrorismo, queda un largo camino por recorrer antes de eliminar del todo los efectos perversos del narcotráfico sobre la economía, la política y la sociedad colombianas; entre ellos, los altos índices de criminalidad que se vinculan a la economía del narcotráfico, se esconden tras de ella o proliferan bajo su sombra; adicionalmente, persiste el enfrentamiento con la guerrilla, y subsisten innumerables formas de justicia privada que el Estado debe encargarse de erradicar. Es decir que, si bien parte de la batalla contra la violencia organizada ha sido ganada, lo que resta es diseñar múltiples estrategias para recuperar, definitivamente, el monopolio de la justicia y del uso legítimo de la fuerza para el Estado colombiano.

### *El liberalismo socialdemócrata*

La administración saliente deja como legado a la entrante la introducción de una serie de respuestas para enfrentar los cuellos de botella más apremiantes de la sociedad colombiana. La direccionalidad del cambio ya ha sido establecida, lo cual no implica que el nuevo gobierno no pueda innovar en algunos campos, o introducir correctivos a las líneas de política trazadas por el anterior. Si bien los desafíos

estructurales continúan siendo los mismos - profundizar la democracia, fortalecer el Estado y la sociedad civil, propiciar un crecimiento estable con equidad -, las condiciones bajo las cuales serán enfrentados tales desafíos han cambiado.

Las circunstancias en que asume el nuevo Presidente, por ejemplo, moldean y delimitan por sí mismas el margen de maniobra de la nueva administración. En este sentido es necesario mencionar dos hechos coyunturales: por un lado, las denuncias acerca de la presencia de «dineros calientes» en la campana electoral y, por el otro, la reactivación de la actividad guerrillera. Ambas parecen conducir a un retorno imprevisto de la dinámica de las dos guerras simultáneas que caracterizaron la grave crisis sufrida por el país a fines de los 80.

Sin haber tomado posesión todavía, Ernesto Samper ha visto cómo se deterioran tanto su imagen personal como las relaciones del país con EEUU, a consecuencia de las denuncias contenidas en los ya mundialmente conocidos «narco-cassettes». Aun cuando probablemente este episodio no tenga desarrollos posteriores, es indudable que ya produjo dos consecuencias muy negativas: por una parte, las negociaciones diplomáticas entre Colombia y EEUU volverán a girar en torno al tema del narcotráfico, retrocediendo así en la necesaria diversificación de la agenda y devolviendo a segundo o tercer plano otros temas de gran importancia para el país. Por otra parte, en cuanto a las implicaciones domésticas, es evidente que el nuevo presidente difícilmente podrá conservar intacta la política de sometimiento a la justicia, clave de la política antinarcóticos diseñada por el anterior gobierno. Persistir en la política de sometimiento a la justicia y de negociación de penas cuando existe un manto de sospechas, así sea injusto, de financiamiento de su campaña presidencial por parte del narcotráfico, hará doblemente sospechosa cualquier transacción. Por ello, seguramente el presidente Samper no podrá mantenerla; pero tampoco parece dispuesto a regresar, pura y llanamente, como quisiera la DEA, a la confrontación total que tantos costos le generó al país hace apenas un lustro. En un punto intermedio entre la política Gaviria de sometimiento a la justicia y la política de guerra total de Barco, se situará muy probablemente la nueva política antinarcóticos.

Por otra parte, el renovado accionar armado de la guerrilla vuelve a colocar al gobierno ante el dilema de represión vs. negociación. si bien la multiplicación de las acciones guerrilleras no es un argumento convincente para la reanudación del diálogo, por lo menos sí funciona como estrategia publicitaria para recordarle al país que la insurgencia crónica persiste y pone al nuevo gobierno ante la necesidad ur-

gente de diseñar y hacer pública una estrategia para ponerle fin, de alguna manera, al conflicto armado interno.

La reanudación del debate sobre el narcotráfico y la insistencia de la guerrilla en aparecer como actor clave en el futuro del país, ponen de nuevo sobre el tapete la cuestión de la paz, como tema central del cual la nueva administración no podrá sustraerse. Con lo cual se hace evidente que los logros alcanzados por la administración saliente no fueron suficientes en el sentido de eliminar estos dos núcleos problemáticos de la agenda de prioridades gubernamentales. También resulta claro que frente a ellos es necesaria una decidida renovación en el diseño de estrategias que le devuelvan al gobierno la iniciativa frente a estas organizaciones y que le permitan dirigir esfuerzos hacia la erradicación de otras formas de criminalidad difusa y común, las cuales parecen haberse convertido en el mayor cáncer de la sociedad colombiana. Estas formas de violencia, sumadas a la persistencia del conflicto guerrillero y a los múltiples efectos perversos que genera el tráfico de drogas, se vislumbran sin duda como uno de los mayores obstáculos a la implementación de un proyecto liberal de corte socialdemócrata como el que pareció perfilarse durante la campaña electoral alrededor de la figura de Samper. ¿Cómo hacer compatibles el necesario fortalecimiento del Estado con el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos? En un plano más concreto, ¿cómo diseñar las políticas contrainsurgente y antinarcóticos para hacerlas compatibles con la profundización de la democracia?

### *Nueva articulación política*

Para llevar acabo un proyecto coherente, en medio de tales dilemas, el nuevo presidente deberá buscar traducir una frágil e inestable coalición electoral, en una fuerte y estable coalición de gobierno. Hasta ahora, lo que se vislumbra es la conformación de un gabinete amplio de coalición con diversas fuerzas políticas, cuyo espectro puede extenderse desde fracciones conservadoras hasta sectores del antiguo movimiento guerrillero. Esto podría garantizarle al gobierno Samper un mínimo de respaldo político necesario para hacer viable su gestión; pero ¿le garantiza el apoyo para poner en marcha un proyecto liberal de corte socialdemócrata?

Un proyecto de ese tipo requeriría la conformación de una coalición estable entre fuerzas de centro y de izquierda, aliadas sobre la base de una propuesta racional, viable y sostenible de transformación social, claramente diferenciada de opciones transitorias e ilusorias, de corte revolucionario, populista o nacionalista. Parece existir una base social disponible para apoyar este tipo de proyectos, compuesta

por el movimiento obrero organizado, las clases medias profesionales politizadas y los sectores populares, urbanos y rurales, afectados por las políticas neoliberales. Incluso las condiciones internas y externas en América Latina parecen favorecer coaliciones políticas de este estilo. A nivel internacional, no sólo ha desaparecido el atractivo de las opciones comunistas revolucionarias, sino también la sospecha de que la socialdemocracia pudiera ser una versión disimulada de comunismo. A nivel doméstico, la izquierda latinoamericana ha sufrido un proceso de aprendizaje que la ha conducido hacia un mayor pragmatismo: de una lógica de oposición contestataria ha ido pasando, sobre todo gracias a las experiencias de gobierno local, a la lógica de cómo gobernar. Pero, ¿existen en nuestro país las fuerzas políticas capaces de garantizar una alianza en este sentido?

Lo curioso en Colombia es que el proyecto socialdemócrata no nace de una izquierda reformada, que haya abandonado sus metas y métodos revolucionarios para transformarse en un movimiento más moderado, al estilo del Partido de los Trabajadores brasileño, sino de una agrupación tradicional como el Partido Liberal. El hecho de que un sector de ese partido se halle ubicado en esa posición está relacionado con dos factores: en primer lugar, con la enorme fragmentación interna que siempre ha permitido la convivencia pragmática de diversas corrientes ideológicas al interior del partido (condición de posibilidad). En segundo lugar, tiene que ver con la necesidad de recuperar lazos con los sectores populares, perdidos desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 (condición de necesidad). A su vez, esta recuperación de sus lazos con la izquierda y con los sectores populares tiene dos objetivos: uno puramente electoral, que consistía en ganarle al competidor más fuerte que se le haya enfrentado al liberalismo en muchos años; el otro, más estratégico, que consiste en recuperar su capacidad de absorción de los sectores políticos y sociales disidentes, o alternativos, ubicados a la izquierda del partido, para fortalecerlo y garantizar su supervivencia a largo plazo. En alguna medida, el surgimiento de un liberalismo de corte socialdemócrata significa una vuelta al liberalismo de los años 30, y quizás represente el inicio de una ruptura en la cultura de la conciliación y la convivencia partidista impuesta por el Frente Nacional.

No obstante, surgen varias preguntas: ¿será suficiente la fuerza de ese sector dentro del partido Liberal para garantizar la viabilidad del proyecto? ¿Tiene ese sector suficientes aliados a la izquierda? ¿Qué fuerzas políticas los representan? El mayor desafío político que enfrenta el nuevo gobierno, si quiere sacar adelante una propuesta de transformación de corte socialdemócrata, consiste en organizar a los dispersos grupos sociales que constituyen su potencial base de apoyo y dotarlos de una representación eficaz y estable en la arena política. También tendría que evitar,

o al menos neutralizar, la formación de una coalición contraria, entre el centro y la derecha, cuyos miembros pueden provenir incluso de su propio partido. El faccionalismo y la potencial oposición del partido de gobierno es otro de los desafíos que debe enfrentar el nuevo gobierno. Y no sólo en lo que atañe al respaldo para su propio proyecto; la fragmentación y el debilitamiento del sistema de partidos va en contra de la lógica de concertación indispensables para un proyecto democrático, debilita al Congreso como espacio de debate y negociación, y favorece las tendencias a la imposición unilateral de decisiones por parte del Ejecutivo.

Otro de los límites que enfrenta la puesta en marcha de proyectos de corte socialdemócrata tanto en Colombia, como en el resto de América Latina, se encuentra en la necesidad de consolidar las economías de mercado. Embarcados en la senda irreversible de la apertura y la internacionalización de sus economías, a los gobiernos latinoamericanos no les queda otra opción que la de asegurar un crecimiento basado en las posibilidades de una inserción estable y exitosa en el sistema económico internacional. Muchos argumentan que tal objetivo es prioritario e incompatible con la igualmente urgente tarea de «cerrar la brecha social», es decir, de contrarrestar las tendencias a la desintegración y la segmentación sociales al interior de cada uno de los países. Sin embargo, el nuevo gobierno colombiano cuenta con condiciones macroeconómicas que pueden favorecer la compatibilidad de estas dos metas, especialmente gracias a la inmensa disponibilidad de recursos que le significará la explotación de los recién descubiertos pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua. Adicionalmente, hay signos que señalan el creciente agotamiento de la versión ortodoxa del neoliberalismo en América Latina. Las reformas estructurales de la década pasada han dado origen a nuevas tareas y nuevos desafíos para los cuales el neoliberalismo no tiene respuesta, como el aumento de la población en extrema pobreza y de la desigualdad social. Las tendencias electorales recientes en América Latina (Chile, por ejemplo) parecen favorecer a gobiernos que, sin dar marcha atrás en el proceso de apertura, reconozcan la necesidad de una renovada intervención del Estado en la regulación de lo social.

La deuda social en Colombia es, como en toda América Latina, enorme. Más de un millón de niños se encuentra en condiciones de desnutrición, seis millones de niños y jóvenes en edad escolar no tienen acceso a la educación, cerca de 14 millones de personas no tienen ni seguridad social ni cobertura de salud primaria, existe un déficit de 2.200.000 viviendas y un 53% de la fuerza laboral trabaja en actividades informales, para sólo mencionar algunos datos impactantes. Pese a la estabilidad ma-

croeconómica que ha caracterizado al país en las últimas décadas, un 50% de las familias continúan viviendo en condiciones de pobreza[5].

Samper se ha comprometido a elevar la participación de la inversión social hasta el 15% del PIB y a poner en marcha una política social agresiva cuyos ejes principales serían: aumentar el empleo, mejorar la calidad y la cobertura de la educación básica, de la salud, del agua y del alcantarillado, ampliar la seguridad social y acelerar la igualación de los regímenes público y privado, subsidios para vivienda popular, reforzar el efecto distributivo de las tarifas de los servicios públicos y finalmente, diseñar políticas específicas para grupos vulnerables como las mujeres y los niños. El desafío no es nimio si se considera que la generación de excedentes para el cumplimiento de las metas sociales y de empleo implica un crecimiento económico superior al 7,5% anual. En todo caso, el nuevo gobierno es conciente de que la política social debe estar articulada y coordinada con la política económica, a diferencia del gobierno saliente para quien la política social terminaba siendo simplemente aplacar los efectos negativos del modelo económico. En síntesis, podríamos reducir a cuatro tópicos los principales desafíos que enfrenta un proyecto de corte socialdemócrata en la Colombia de hoy: 1) reformar el Estado desenfatizando su papel como agente de producción, pero reforzando su papel de integrador del orden social, es decir, como garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y como regulador del conflicto social y político; asimismo constituirse en un regulador del mercado en el sentido de compensar sus tendencias centrífugas (hacia la exclusión de múltiples sectores), mediante políticas fiscales y tributarias sanas, eficaces y progresivas; 2) fortalecer la capacidad de representación y de participación autónomas de la sociedad civil; 3) dinamizar la economía, garantizar su crecimiento y su capacidad de vinculación al sistema internacional, dentro de condiciones que promuevan la equidad; y 4) promover el proceso de consolidación democrática, y la reducción de prácticas como el clientelismo y la corrupción.

Bogotá, agosto de 1994

***Referencias***

*Bejarano, Ana María, ANALISIS POLITICO. 22, 5-8 - 1994; Recuperar el Estado para fortalecer la democracia.

*López-Restrepo, Andrés, ANALISIS POLITICO. 21, 1-4. p20-1 - 1994; El cambio de modelo de desarrollo de la economía colombiana.

[5]Libardo Sarmiento: «Samper: ¿opción social ?» en Caja de Herramientas, 7/1994, p. 2.

*Corredor, Consuelo, LA ESTRATEGIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO EN COLOMBIA. - Bogotá, Colombia, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, CID. 1993; Samper: ¿opción social?

*Sarmiento, Libardo, CAJA DE HERRAMIENTAS. 7. p2 - 1994;

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 133, Septiembre- Octubre de 1994, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**